RECOMENDACIÓN No. 14/2021

Síntesis: Una víctima del delito de violencia familiar, señaló no haber recibido la suma de dinero que ella consideraba le correspondía por concepto de reparación del daño, debido a las omisiones en que incurrieron las autoridades correspondientes, lo cual a su juicio era constitutivo de violaciones sus derechos humanos, particularmente en los que conciernen a las víctimas u ofendidos del delito.

Atendiendo a los razonamientos y consideraciones vertidas en la resolución, se encontraron evidencias suficientes para considerar violados los derechos fundamentales de la víctima, específicamente el derecho de acceso a la justicia y a la reparación del daño, debido a que personal adscrito a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, omitió tomar medidas correspondientes para garantizar la reparación integral del daño y en su caso la indemnización.

“2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México”

“2021, Año de las Culturas del Norte”

Oficio: CEDH:1s.1.098/2021

Expediente: CEDH:10s.1.3.020/2020

RECOMENDACIÓN No. CEDH:5s.1.014/2021

Chihuahua, Chih., a 29 de junio de 2021

MTRO. CÉSAR AUGUSTO PENICHE ESPEJEL

FISCAL GENERAL DEL ESTADO

P R E S E N T E.-

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en relación a la queja presentada por “A”¹, con motivo de actos u omisiones que considera violatorios a sus derechos humanos, radicada bajo el número de expediente **CEDH:10s.1.3.020/2020**; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4, párrafo tercero, inciso A, de la Constitución Política del Estado, en relación con los numerales 3 y 6, fracciones I y II, de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, así como 6 y 12, del Reglamento Interno de esta Comisión, procede a resolver lo conducente, según el estudio de los siguientes:

¹ Por razones de confidencialidad y protección de datos personales, este organismo considera conveniente guardar la reserva de los nombres de algunas de las personas que intervinieron en los hechos, así como otros datos que puedan llevar a su identificación, los cuales se hacen del conocimiento de la autoridad mediante un documento anexo. Lo anterior con fundamento en los artículos 4º, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; 8º, del Reglamento Interno de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; 3, fracción XXI, 68, fracción VI, 116, párrafos primero y segundo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 6, 7, 16, 17, 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 3, 16 y 171 fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, y demás aplicables, y de conformidad al Acuerdo de Clasificación de Información de fecha 6 de diciembre de 2019, que obra dentro del expediente de queja en resolución.

I.- ANTECEDENTES:

1.- Con fecha 24 de enero de 2020, se recibió en esta Comisión escrito de queja suscrito por “A”, en el que manifestó lo siguiente:

“... Tal es el caso que, en el año 2016 la suscrita interpuse una denuncia por hechos que pueden ser constitutivos del delito que prevé el artículo 193 del Código Penal del Estado de Chihuahua, toda vez, que es relativo al delito de violencia familiar dentro de la causa penal “B”.

De lo anterior, se advierte que mi carpeta de investigación le fue asignada al agente del Ministerio Público, el licenciado “F”, persona quien con fecha 08 de marzo de 2017, solicitó el procedimiento abreviado.

Por otra parte, cabe mencionar que el aludido Ministerio Público, fue omiso en solicitar la reparación del daño puesto que no formuló acusación al respecto, bajo ese tenor, siendo que así se pronunció en su fallo el Tribunal de Control para el Distrito Judicial Morelos, causándome con ello un perjuicio.

No obstante, considero que las acciones y omisiones del servidor público anteriormente mencionado, vulneran mis derechos humanos, por lo que solicito se principie una investigación a efecto de determinar la responsabilidad en la que ha incurrido y en el momento procesal oportuno se emita la Recomendación correspondiente...”. (Sic).

2.- Solicitado el informe de ley a la autoridad involucrada, el 19 de febrero de 2020 se recibió el oficio número UARODH/CEDH/505/2020, suscrito por el maestro Jesús Manuel Fernández Domínguez, de la Unidad de Atención y Respuesta a Organismos de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, mediante el cual rindió respuesta a este organismo en relación a los hechos motivo de la queja, en los siguientes términos:

“...I.3. ACTUACIÓN OFICIAL. De acuerdo con la información recibida por parte de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, relativa a la queja Interpuesta por “A”, se informan las actuaciones realizadas por la autoridad:

1.- La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delito por Razones de Género, informó el estado procesal de la causa penal “B”, del índice del Juzgado de Control de Garantías de este Distrito Judicial Morelos, la cual se encuentra en estatus de sentencia, así como adjunta el registro óptico de la audiencia de mecanismos de aceleración, por violencia familiar, celebrada el día 07 de abril de 2017, en el que se visualiza que al momento de formular acusación, solicitó se le condenara al acusado, por concepto de reparación del daño la cantidad de \$21,600.00 (veintiún mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), en base a la valoración psicológica, a razón de un tratamiento de treinta y seis sesiones de \$600.00 (seiscientos pesos 00/100 m.n.) una cada semana, así mismo se solicitó pena de prisión por tres años seis meses, recibiendo un fallo condenatorio tanto de la pena, como de la reparación del daño...”. (Sic).

II.- EVIDENCIAS:

3.- Escrito de queja presentado por “A” ante este organismo, en fecha 24 de enero de 2020, cuyo contenido ha quedado descrito en el párrafo 1 de la presente resolución. (Fojas 1 a 4).

4.- Acta circunstanciada de fecha 24 de enero de 2020, elaborada por la licenciada Mariel Gutiérrez Armendáriz, entonces visitadora de este organismo, en la que hizo constar la comunicación sostenida con “A”, a efecto de notificarle la radicación de su queja. (Foja 6).

5.- Acta circunstanciada de fecha 24 de enero de 2020, realizada por la licenciada Mariel Gutiérrez Armendáriz, entonces visitadora de esta Comisión, en la que se hizo constar la conversación telefónica sostenida con “A”, a efecto de requerirle que exhibiera copia de la sentencia dictada en la causa penal “B” y que proporcionara el nombre de su asesor jurídico. (Foja 7).

6.- Acta circunstanciada de fecha 27 de enero de 2020, elaborada por la licenciada Mariel Gutiérrez Armendáriz, entonces visitadora de este organismo, en la que se hizo constar la comunicación sostenida con “A”, durante la cual se le requirió copia de la sentencia dictada en la causa penal “B”. (Foja 8).

7.- Acta circunstanciada de fecha 29 de enero de 2020, realizada por la licenciada Mariel Gutiérrez Armendáriz, entonces visitadora de esta Comisión, en la que se hizo constar la comparecencia de la quejosa en la que aportó copia simple de los siguientes documentos:

7.1.- Oficio número JG-28504/19 de fecha 17 de diciembre de 2019, signado por la licenciada Hilda María Márquez Torres, jueza de control del Distrito Judicial Morelos, en el que se tiene por designado como asesor jurídico de “A” al licenciado Roberto Rivera Hernández y se autoriza la emisión de copia certificada de la sentencia dictada en la causa penal “B”. (Fojas 10 y 11).

7.2.- Sentencia de fecha 09 de abril de 2017 dictada por la licenciada Delia Valentina Meléndez Olivas, jueza de control del Distrito Judicial Morelos, dentro de la causa penal “B”, instruida en contra de “C”, por el delito de violencia familiar en contra de “A”. (Fojas 12 a 20).

7.3.- Constancia de lectura de los derechos de la víctima u ofendido de fecha 13 de diciembre de 2019, firmada por “A” ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado. (Foja 21).

7.4.- Constancia de solicitud de inscripción de fecha 17 de diciembre de 2019 ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, por medio de la cual “A” solicita su inscripción como víctima directa y la de sus hijas e hijos como víctimas indirectas, al Pre-registro Estatal de Víctimas. (Foja 22).

8.- Acta circunstanciada de fecha 29 de enero de 2020, elaborada por la licenciada Mariel Gutiérrez Armendáriz, entonces visitadora de esta Comisión, en la cual hizo constar la comunicación sostenida con la quejosa “A”, quien informó respecto a los avances de la atención asistencial ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua, dada su situación económica. (Fojas 26 y 27).

9.- Impresión del correo electrónico de fecha 29 de enero de 2020, por el cual se remite información del expediente CEDH:10s.1.3.020/2020 al asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado que le fue asignado a “A”. (Fojas 29 y 30).

10.- Impresión del correo electrónico de fecha 29 de enero de 2020, por el cual el asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado que le fue asignado a “A”, confirma la recepción de la información. (Foja 30).

11.- Oficio número FGE-11C.5/1/1/26/2020 recibido en fecha 07 de febrero de 2020, suscrito por la licenciada Ana Carolina Luján Ramírez, en su calidad de coordinadora regional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, en el cual informa el apoyo asistencial y jurídico otorgado a la quejosa, anexando la siguiente documentación en copia simple:

11.1.- Oficio FGE-11.C5/2/2/6/2020 de fecha 06 de febrero de 2020, suscrito por la licenciada Diana Isela Duarte Valles, coordinadora del Área de Psicología de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, por medio del cual informó respecto a la atención brindada a la quejosa “A”. (Foja 33).

11.2.- Ficha informativa de fecha 07 de febrero de 2020, suscrita por el licenciado Rigoberto Rivera Hernández, asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, quien informó sobre las acciones que ha efectuado como asesor jurídico de “A”. (Fojas 34 y 35).

12.- Oficio número 1789/2020, con sello de recepción de fecha 07 de febrero de 2020, suscrito por la licenciada Hilda María Márquez Torres, jueza de control del Distrito Judicial Morelos, girado en atención al requerimiento de información formulado mediante oficio número CEDH:10s.1.3.043/2020. (Foja 36).

13.- Oficio número FGE-11C.5/1/1/32/2020 recibido el 13 de febrero de 2020, suscrito por la licenciada Ana Carolina Luján Ramírez, coordinadora regional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, por medio del cual amplía la información remitida mediante el similar oficio número FGE-11C.5/1/1/26/2020, al cual anexa:

13.1.- Copia simple del escrito de fecha 07 de febrero de 2020, suscrito por la licenciada Rocío Guadalupe Sánchez Soto, trabajadora social de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, por medio del cual hace una descripción de la atención que ha sido brindada a la quejosa “A”, desde julio de 2013 a noviembre de 2019. (Fojas 39 y 40).

14.- Oficio número UARODH/CEDH/505/2020, con sello de recepción de fecha 19 de febrero de 2020, suscrito por el maestro Jesús Manuel Fernández Domínguez, de la Unidad de Atención y Respuesta a Organismos de Derechos Humanos de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada, por medio del cual rindió el informe de ley por parte de la Fiscalía General del Estado en los términos detallados en el párrafo 2 del apartado de antecedentes (fojas 41 a 45), anexando la siguiente información en copia simple:

14.1.- Oficio número FGE/24S/1/344/2020 de fecha 14 de febrero de 2020, suscrito por la licenciada Wendy Paola Chávez Villanueva, fiscal especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, por medio del cual remitió el similar FGE-24S.2-026-2020. (Foja 46).

14.1.1.- Oficio número FGE-24S.2-026-2020 de fecha 14 de febrero de 2020, signado por la licenciada Claudia Margarita Ríos Villa, coordinadora regional Zona Centro de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, por medio del cual remite información respecto al estado procesal de la causa penal 3300/2016, de acuerdo al contenido del similar FEATMJ-4970/2020. (Foja 47).

14.1.1.1.- Oficio número FEATMJ-4970/2020, dirigido a la coordinadora regional Zona Centro de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, signado por la licenciada "G", agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, por medio del cual informa el estado procesal de la causa penal "B". (Foja 48).

15.- Acta circunstanciada de fecha 27 de febrero de 2020, elaborada por la licenciada Mariel Gutiérrez Armendáriz, entonces visitadora general de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en la que se asentó la notificación a la quejosa "A", del informe de ley rendido por la autoridad señalada como responsable. (Fojas 51 y 52).

III.- CONSIDERACIONES:

16.- Esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos es competente para conocer y resolver en el presente asunto, atento a lo dispuesto por el artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4, párrafo tercero,

inciso A, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en relación con los numerales 3 y 6, fracciones I y II, de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, así como 6, 12 y 84, fracción III, del Reglamento Interno de este organismo.

17.- Según lo establecido en los artículos 39 y 40, de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, resulta procedente, por así permitirlo el estado que guarda la tramitación del presente asunto, analizar los hechos, los argumentos y las pruebas, así como los elementos de convicción recabados y las diligencias practicadas, a fin de determinar si las autoridades o las personas servidoras públicas han violado o no derechos humanos, al haber incurrido en actos ilegales o injustos, por lo que las pruebas recabadas durante la investigación, deberán ser valoradas en su conjunto de acuerdo a los principios de la lógica y la experiencia, con estricto apego al principio de legalidad que demanda nuestra carta magna para que, una vez realizado ello, se pueda producir convicción sobre los hechos materia de la presente queja.

18.- La controversia sometida a consideración de este organismo, reside sustancialmente en el hecho de que “A”, víctima del delito de violencia familiar, no recibió la suma de dinero que ella consideraba le correspondía por concepto de reparación del daño, debido a omisiones por parte de las autoridades correspondientes. Lo cual, podría traducirse en violaciones al derecho humano de acceso a la justicia, en relación con los derechos de las víctimas u ofendidos.

19.- En tal sentido, tomando en cuenta las condiciones específicas de la quejosa “A”, se debe analizar si los hechos planteados quedaron acreditados y en su caso, determinar si los mismos resultan ser violatorios de sus derechos humanos.

20.- Previo a ello, debemos reconocer la posición de desigualdad histórica en la que se encuentran las mujeres, que tiene como origen las diferencias que la sociedad y la cultura han creado en torno a lo que es ser hombre y ser mujer, a partir de las

cuales el poder –en su más amplia concepción– es articulado, estructurando la percepción y la organización concreta de la vida social, lo cual resulta determinante para el acceso efectivo de sus derechos.

21.- Dicho de otro modo, el contexto ideológico, social y cultural en que se desenvuelven las relaciones entre mujeres y hombres es relevante para mostrar patrones socioculturales que determinan la existencia de conceptos estereotipados sobre la desigualdad y relaciones asimétricas de poder entre ambos géneros, lo cual, a la postre, engendra prácticas de discriminación.

22.- Dicha posición de desigualdad, coloca a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad ante actos de abuso de poder que se materializan en violencia, la cual se manifiesta de distintas maneras y en distintos ámbitos.

23.- Una de estas manifestaciones es la violencia familiar, fenómeno que se presenta a través de distintos tipos de acciones, las cuales causan daño a la integridad física, la estabilidad emocional, la salud mental, así como a la libertad y seguridad sexuales de las víctimas.

24.- Dicha problemática, constituye un delito y su incidencia ha colocado al estado de Chihuahua dentro de los primeros diez lugares a nivel nacional, pues según datos recabados por FICOSEC², las carpetas de investigación abiertas por violencia familiar durante 2018 sumaron 11 mil 227 en el estado, colocándolo a nivel nacional en el quinto lugar; mientras que, en 2019 las carpetas por este delito fueron 10 mil 968 ubicándolo en el décimo lugar.

25.- En relación a lo anterior, es oportuno señalar que de acuerdo con los datos de la ENDIREH³ (2016), de las mujeres que sufrieron violencia física y/o sexual por

² Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana. Datos disponibles para consulta en: <https://ficosec.org/los-delitos-de-feminicidio-y-violencia-familiar-en-el-estado-de-chihuahua/>.

³ Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. Datos disponibles para consulta en: <https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/>.

parte de su pareja o ex pareja, el 8.8% sólo solicitó apoyo, el 5.6% sólo denunció, el 5.6% solicitó apoyo y denunció, mientras que el 78% no denunció ni pidió apoyo alguno, siendo una de las causas la falta de confianza en las autoridades.

26.- Una vez establecido el contexto de análisis, se procederá a señalar las premisas normativas que reconocen los derechos referidos en la presente recomendación.

27.- El acceso a la justicia está reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los diversos instrumentos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14) y la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 10), que reconocen a éste como un elemento fundamental del Estado de derecho, pues, sin acceso a la justicia, las personas no pueden hacer oír su voz, ejercer sus derechos, hacer frente a la discriminación o hacer que rindan cuentas las personas encargadas de la adopción de decisiones. En tal sentido, la Declaración de la Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de Derecho, hizo hincapié en el derecho a la igualdad de acceso a la justicia para todas las personas, incluidas las que pertenecen a grupos vulnerables, y reafirmó el compromiso de los Estados miembros de adoptar todas las medidas necesarias para prestar servicios justos, transparentes, eficaces, no discriminatorios y responsables que promovieran el acceso a la justicia para todas las personas, incluida la asistencia jurídica (párrafos 14 y 15).

28.- En materia de víctimas de delitos, el derecho de acceso a la justicia se ve reforzado con el contenido de los artículos 1, párrafo tercero y 20 apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 109, 131 fracción XXII y 459 fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales; así como los artículos 8, 9, 28, 29, 34 y demás relativos de la Ley General de Víctimas, que establecen los derechos de las víctimas y las obligaciones gubernamentales para su atención, señalando que la gravedad del daño sufrido por las víctimas será el eje que determinará prioridad en su asistencia, en la prestación de servicios y en

la implementación de acciones dentro de las instituciones encargadas de brindarles atención y tratamiento. Asimismo, señala que los servicios tomarán en cuenta si la víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente tratándose de los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como lo son niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno.

29.- Establecidas las premisas legales que anteceden, es menester ahora realizar un análisis de las evidencias que obran en el expediente a fin de establecer si las autoridades que intervinieron en el presente asunto vulneraron por acción u omisión dichos preceptos, afectando así los derechos señalados previamente.

30.- Es así, que tenemos que “A” fue víctima del delito de violencia familiar cometido en su contra por “C”, motivo por el cual se sustanció la causa penal “B”, previa integración de la indagatoria correspondiente, como se desprende de las documentales referidas en el capítulo de evidencias.

31.- De las documentales remitidas por las autoridades al momento de rendir información ante este organismo, se desprende que “A” se encontraba en una situación de muy alto riesgo, por lo que en diversas ocasiones ha requerido de la atención asistencial de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, antes y después de la sentencia emitida en la causa penal “B”, tomando en cuenta que “C” había sido previamente sentenciado por agredirla. (Visible en foja 14).

32.- Asimismo, del informe de la autoridad se desprende que la agente del Ministerio Público que compareció ante la autoridad judicial en representación de la víctima “A”, solicitó se le condenara al acusado al pago de la cantidad de \$21,600.00 (veintiún mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de reparación del daño. Sin embargo, la quejosa señaló que a ella no se le notificó respecto a la reparación

del daño y que la Fiscalía no acudió a la lectura de la sentencia y no interpuso ningún recurso respecto al sentido en que se emitió la misma y no volvieron a tener comunicación con ella, hasta que se acercó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a solicitar apoyo. (Visible en foja 52).

33.- En fecha 09 de abril de 2017, se emitió la resolución de la causa penal “B” y en su considerando noveno, se determinó absolver al sentenciado del pago por concepto de reparación del daño al no haber acusación al respecto, como se advierte en la foja 19 del expediente de queja.

34.- El día 12 de diciembre de 2018, la quejosa se puso en contacto con personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, ya que temía que “C” obtuviera su libertad y debido a que no se le había efectuado la reparación del daño, posteriormente, el 13 de diciembre de 2019 se le realizó la lectura de derechos de la víctima a la impetrante y se le designó un asesor jurídico, mismo que solicitó copia de la resolución en cuestión y fue así que “A” tuvo la certeza de que se había absuelto a su agresor de reparar el daño.

35.- Del caudal probatorio que obra en autos, se evidenció plenamente que la persona agente del Ministerio Público que llevó la voz en las audiencias, no veló por la satisfacción plena de los intereses de la víctima. Esto es debido a que dentro del proceso judicial, si bien es cierto que solicitó formalmente una cantidad por concepto de reparación del daño causado (visible en foja 42), también lo es que no se cercioró que la sentencia judicial emitida contemplara la reparación del daño respectivo. Aunado a lo anterior, omitió negligentemente recurrir la sentencia, convalidando la irregularidad reclamada por la quejosa, la falta de recursos interpuestos contra la resolución es cierta, pues dentro de las copias de la sentencia emitida, la autoridad judicial estableció: “...la presente es copia fiel y correcta de su original que obra en la causa “B”, la cual se encuentra en etapa de ejecución, en la que no se encuentra pendiente de resolver recurso alguno...”. (Visible en foja 20).

36.- No pasa desapercibido para este organismo, que la autoridad en su informe manifestó expresamente que: "...se solicitó pena de prisión por tres años seis meses, recibiendo un fallo condenatorio tanto de la pena, como de la reparación del daño..." (visible en foja 42), siendo esta última circunstancia contraria a lo que verdaderamente sucedió.

37.- Con la deficiente actuación del Ministerio Público, se vulneró lo dispuesto en el artículo 20, inciso C, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: "...El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación (...) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (...) IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño...".

38.- A mayor abundamiento, se advierte que con las deficiencias detectadas en el actuar del representante social, se transgredió el numeral 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales que a la letra dice: "...Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (...) XXIV. A que se le garantice la reparación del daño durante el procedimiento en cualquiera de las formas previstas en este Código...".

39.- En consonancia con la porción normativa de mérito, resulta aplicable lo dispuesto por el arábigo 131 del mismo ordenamiento legal en consulta que refiere: "...Obligaciones del Ministerio Público. Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones: (...) XXII. Solicitar el pago de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido del delito, sin perjuicio de que éstos lo pudieran solicitar directamente...".

40.- Del análisis de las disposiciones legales señaladas, podemos concluir que éstas contrastan con la omisión cometida por parte de la persona agente del Ministerio Público, la cual causó un menoscabo y un detrimento en la esfera jurídica de la quejosa, debido a la falta de resarcimiento por el delito cometido en su perjuicio. Dicha omisión, como puede advertirse en líneas anteriores, debe ser calificada como una acción revictimizante, que dada su propia y especial naturaleza, se apartó de los parámetros internacionales establecidos en la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, mediante Resolución 40/34, el 29 de noviembre de 1985, cuyo texto literal es el siguiente: “Resarcimiento. 8. Los delincuentes o los terceros responsables de su conducta resarcirán equitativamente, cuando proceda, a las víctimas, sus familiares o las personas a su cargo. Ese resarcimiento comprenderá la devolución de los bienes o el pago por los daños o pérdidas sufridos, el reembolso de los gastos realizados como consecuencia de la victimización, la prestación de servicios y la restitución de derechos. 9. Los gobiernos revisarán sus prácticas, reglamentaciones y leyes, de modo que se considere el resarcimiento como una sentencia posible en los casos penales, además de otras sanciones penales. (...) 11. Cuando funcionarios públicos u otros agentes que actúen a título oficial o cuasioficial hayan violado la legislación penal nacional, las víctimas serán resarcidas por el Estado, cuyos funcionarios o agentes hayan sido responsables de los daños causados. En los casos en que ya no exista el gobierno bajo cuya autoridad se produjo la acción u omisión victimizadora, el Estado o gobierno sucesor deberá proveer al resarcimiento de las víctimas”.

41.- Siguiendo esa misma línea argumentativa, este organismo estima que la conducta desplegada en forma de omisión, por parte del Ministerio Público, merece ser sujeta a un juicio de reproche, debido a que se incumplió un deber fundamental de protección de los derechos de las víctimas. Ello, aconteció pese a que el Ministerio Público, por disposición constitucional, tiene el deber de encausar el

procedimiento judicial para elevar los reclamos de las víctimas a fin de que la autoridad judicial valore el otorgamiento o no de medidas tendientes a la reparación.

42.- Esto es, que si el representante social, no logra hacer valer las pretensiones de la víctima ante quien juzga, pueda recurrir a una instancia superior como lo es la segunda instancia, con el fin de que los actos puedan estar sujetos a una nueva revisión e inclusive si no se logra su cometido, se encuentra también la vía del juicio de amparo. Es por ello que el legislador ordinario, le otorgó una facultad para que en el supuesto de no encontrar satisfechos los derechos de las víctimas, pueda recurrir las resoluciones ante un tribunal de alzada y con ello estar en la posibilidad de revertir el fallo señalado como irregular.

43.- Nos sirve de apoyo a lo aseverado, el siguiente criterio de jurisprudencia internacional emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo texto literal es el siguiente: "...47. La Corte se ha referido en su jurisprudencia constante sobre el alcance y contenido del artículo 8.2.h) de la Convención, así como a los estándares que deben ser observados para asegurar la garantía del derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior. El Tribunal ha entendido que dicho derecho consiste en una garantía mínima y primordial que "se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía [...]". Teniendo en cuenta que las garantías judiciales buscan que quien esté incurso en un proceso no sea sometido a decisiones arbitrarias, la Corte ha interpretado que el derecho a recurrir el fallo no puede ser efectivo si no se garantiza respecto de todo aquél que es condenado, ya que la condena es la manifestación del ejercicio del poder punitivo del Estado. La Corte ha considerado el derecho a recurrir el fallo como una de las garantías mínimas que tiene toda persona que es sometida a una investigación y proceso penal⁴".

⁴Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Gorioitía vs. Argentina*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2019. Serie C No. 382, Párrafo 47.

44.- En el año 2000, el relator especial sobre el derecho de restitución, indemnización y rehabilitación de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y las libertades fundamentales⁵, M. Cherif Bassiouni, presentó su informe final ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Adjuntó al informe un borrador de los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer un recurso y a recibir reparación (Principios Van Boven-Bassiouni). En estos principios y directrices básicos se reconocen las siguientes formas de reparación: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición⁶.

45.- El conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, también conocidos como “Principios de Joinet”⁷ contiene los siguientes lineamientos generales sobre el derecho a obtener reparación:

“Principio 33. Derechos y deberes dimanantes de la obligación de reparar.

Toda violación de un derecho humano da lugar a un derecho de la víctima o sus derechohabientes a obtener reparación, el cual implica el deber del Estado de reparar y el derecho de dirigirse contra el autor.

Principio 34. Procedimientos de recurso en solicitud de reparación.

Tanto por la vía penal como por la civil, administrativa o disciplinaria, toda víctima debe tener la posibilidad de ejercer un recurso accesible, rápido y eficaz [...]; en el ejercicio de dicho recurso, debe beneficiarse de una protección contra actos de intimidación y represalias. El ejercicio del derecho a obtener reparación comprende el acceso a los procedimientos internacionales aplicables.

Principio 35. Publicidad de los procedimientos de reparación.

Los procedimientos especiales que permitan a las víctimas ejercer su derecho a obtener reparación serán objeto de la más amplia publicidad posible, incluso por los

⁵ Designado por la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la ONU para llevar a cabo estudios especializados sobre esta cuestión.

⁶ Véase Doc. ONU E/CN.4/2000/62, 18 de enero del 2000. La redacción original de los Principios corresponde al primer relator especial, Theo Van Boven, y su revisión al segundo relator especial.

⁷ Véase: <https://undocs.org/pdf?symbol=es/E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1>.

medios de comunicación privados. Se deberá asegurar esa difusión tanto en el interior del país como en el extranjero, incluso por la vía consular, especialmente en los países a los que hayan debido exiliarse muchas víctimas.

Principio 36. *Ámbito de aplicación del derecho a obtener reparación.*

El derecho a obtener reparación deberá abarcar todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima; comprenderá, por una parte, medidas individuales de reparación relativas al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación y, por otra, medidas de satisfacción de alcance general...”.

46.- Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos toma como criterio para la reparación, el principio *pro persona*, cuya aplicación busca que las reparaciones sean siempre las que proporcionen la protección más amplia a las víctimas. Acorde con ello, las reparaciones deben ser integrales, tener lógica, ser coherentes en beneficio de los involucrados y ser percibidas de esta manera por la sociedad, pues de esta forma tendrán trascendencia presente y futura que se convertirá en un beneficio constante para la colectividad.

47.- En este punto, administrando lógica y jurídicamente las evidencias anteriormente señaladas podemos concluir que existen elementos suficientes para producir convicción, en el sentido de que “A” ha sido afectada en su derecho humano de acceso a la justicia y a una reparación, en relación con sus derechos como víctima de violencia familiar, en especial a contar con una defensa adecuada; ya que si bien es cierto, la agente del Ministerio Público solicitó la reparación del daño a favor de la víctima y a pesar de ello se absolvió a “C” del pago, también lo es que la misma agente del Ministerio Público, conoció el contenido de la resolución sin advertir tal omisión por parte de la autoridad jurisdiccional y sin hacerla del conocimiento de la víctima, en consecuencia, no se solicitó una aclaración a la misma o se ejercitó recurso alguno.

48.- Es decir, la misma Fiscalía General del Estado al rendir su informe, no manifestó que el contenido de la sentencia se hubiera hecho del conocimiento de

“A”, antes de la intervención del asesor jurídico asignado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Aunado al hecho de que, a pesar de haber recibido en múltiples ocasiones atención asistencial por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado y haber advertido el alto riesgo en que se encontraba, fue hasta el mes de diciembre de 2019 que se le asignó un asesor jurídico. Sobre el particular, vale la pena citar el contenido de la siguiente jurisprudencia:

VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. AL TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE PARTE ACTIVA EN TODAS LAS ETAPAS PROCEDIMENTALES, DEBEN GARANTIZARSE SUS DERECHOS DE DEFENSA ADECUADA, DEBIDO PROCESO Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, MEDIANTE LA DESIGNACIÓN DE UN ASESOR JURÍDICO CON CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN DERECHO, SUFICIENTES PARA ACTUAR DILIGENTEMENTE CON EL FIN DE PROTEGER SUS GARANTÍAS PROCESALES Y EVITAR QUE SUS DERECHOS HUMANOS SE VEAN LESIONADOS⁸. El carácter de parte otorgado a la víctima u ofendido del delito en el proceso penal acusatorio y oral está reconocido constitucional y jurisprudencialmente. Así, en congruencia con los artículos 14, 17 y 20, apartado C, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para que pueda tener un verdadero acceso a la justicia y ejercer eficazmente sus derechos humanos, entre otras cosas, debe recibir asesoría jurídica adecuada; lo que no debe entenderse de manera aislada, es decir, en el sentido estricto de que existe un derecho genérico a favor de la víctima u ofendido del delito a contar con asesoría jurídica. Por el contrario, en su interpretación debe partirse de una lectura sistemática con el apartado C del artículo 20 constitucional, y funcional con el

⁸ Datos de localización: Registro: 2022390. Época: Decima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Materia: Constitucional. Tesis: I.10º.p. 38 P. (10a).

principio de igualdad, subyacente en el artículo 1o. de la Norma Suprema; ello, en virtud de que los alcances de ese derecho –asesoría jurídica– son un reflejo de la defensa técnica adecuada que asiste a los imputados y, por ende, tienen los mismos alcances. De ahí que para garantizar sus derechos de defensa adecuada, debido proceso y tutela judicial efectiva, así como atendiendo a los principios de igualdad procesal y contradicción, la víctima u ofendido no sólo debe contar con un asesor jurídico con conocimientos técnicos en derecho, suficientes para actuar diligentemente durante las diversas etapas del procedimiento penal, sino además, ese asesor debe tener conocimiento en el sistema penal acusatorio y estar debidamente impuesto de la carpeta de investigación, es decir, conocer los hechos que motivan su intervención, con el fin de proteger sus garantías procesales y evitar que sus derechos humanos se vean lesionados; forma en que se garantiza el equilibrio procesal entre las partes, ya que si existe deficiente actuación de la asesoría jurídica, se trastoca el derecho humano de tutela judicial efectiva que le asiste como víctima u ofendido del delito, pues la igualdad de circunstancias en el proceso es una condición de equilibrio que el juzgador debe asegurar por los medios legales a su alcance, a efecto de que se cumplan las condiciones que posibiliten su ejercicio y que el triunfo de uno no se deba a la deficiencia del otro.

49.- Por lo antes expuesto, es que este organismo derecho humanista determina, que al contar con elementos fidedignos de prueba, se ha producido plena convicción de que personas servidoras públicas pertenecientes a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, realizaron una gestión inadecuada e ineficiente de la causa penal “B”, en lo que respecta al seguimiento de la sentencia, en la cual se absolvió al sentenciado al pago por concepto de reparación del daño en perjuicio de “A”, haciendo evidente que no se llevó a cabo un acompañamiento diligente, responsable, especializado y profesional

por parte de la autoridad, violando así el derecho de acceso a la justicia y a la reparación del daño de la víctima.

IV.- RESPONSABILIDAD:

50.- La responsabilidad que se genera con motivo de las violaciones a los derechos humanos analizadas y evidenciadas, corresponde a los actos u omisiones realizadas por las personas servidoras públicas pertenecientes a la Fiscalía General del Estado, quienes contravinieron las obligaciones contenidas en los numerales 7, fracción I, V, VII, y 49, fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que prevén que las personas servidores públicas deberán observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia, actuando conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales correspondientes a su empleo, cumpliendo con sus funciones y atribuciones encomendadas, observando disciplina y respeto y que así lo hagan las personas servidoras públicas sujetas a su cargo, lo que además implicó incumplimiento de las disposiciones jurídicas relacionadas con el servicio público, que se han precisado.

51.- En ese orden de ideas, al incumplir con las obligaciones establecidas en los artículos 1, párrafo tercero y 20 apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los numerales 109, 131 fracción XXII y 459 fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales; así como los artículos 8, 9, 12, 26, 27 y demás relativos de la Ley General de Víctimas, que establecen los derechos de las víctimas y las obligaciones gubernamentales para su atención, así como en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, resulta procedente instaurar procedimiento administrativo en el que se determine el grado de responsabilidad en el que incurrieron las y los agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, que tuvieron a su cargo la carpeta de investigación identificada con motivo de los

hechos acreditados en la presente resolución, y en su caso, se apliquen las sanciones correspondientes.

V.- REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO :

52.- Por todo lo anterior, se determina que “A” tiene derecho a la reparación integral del daño sufrido en virtud de los hechos que motivaron la apertura de esta queja, en los términos de la jurisprudencia que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y con base en la obligación para el Estado de reparar las violaciones a los derechos humanos, considerando además la responsabilidad del mismo, por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular cause en los bienes o derechos de los particulares, según lo dispuesto en los artículos 1º, párrafo tercero y 109, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 178, antepenúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado de Chihuahua.

53.- Al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible al Estado, la recomendación formulada debe incluir las medidas efectivas de restitución de las personas afectadas en sus derechos fundamentales y las relativas a la reparación de los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado, para lo cual el Estado deberá de investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Para tal efecto, en términos de los artículos 1, 2, fracción I, 4, 7 fracciones II, VI, VII, 27, 64 fracciones I y II, 67, 68, 88 fracción II, 96, 97 fracción II, 106, 110 fracción IV, 111, 112, 126 fracción VII, 130, 131 y 152 de la Ley General de Víctimas; 6, 20, fracciones II, 22, fracciones IV, VI, 36, fracción IV, 37, fracciones I, II y 39 de la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua, se deberá reparar el daño de manera integral a “A” por las violaciones a derechos humanos cometidas en su agravio y que han quedado precisadas en la presente Recomendación, así como su inscripción ante el Registro Estatal de Víctimas. Debiendo tenerse como parámetro para la reparación integral del daño lo siguiente:

a) Medidas de satisfacción.

53.1.- Este organismo protector de derechos humanos considera que la presente recomendación, *per se*, es una forma de reparación.

53.2.- Como medida de satisfacción, en los términos del artículo 73, fracción I y III de la Ley General de Víctimas, se deberá instaurar, substanciar y resolver el procedimiento administrativo en contra de las personas responsables de las violaciones de derechos humanos, a saber, quienes tuvieron intervención en la causa penal “B”, y en su caso, imponérseles las sanciones administrativas que correspondan, dentro de las cuales se contemple indemnizar a “A” con motivo de los perjuicios ocasionados por su actuación negligente.

b) Medidas de no repetición.

53.3.- Estas consisten en implementar las medidas que sean necesarias para conseguir que los hechos violatorios de derechos humanos no se repitan y se contribuya a su prevención; por ello, el Estado y sus autoridades deben adoptar todas las medidas legales y administrativas para hacer efectiva la garantía de que todos los actos administrativos se ajusten a las normas nacionales e internacionales relativas a la competencia, independencia e imparcialidad de las resoluciones y las garantías del debido proceso.

53.4.- En relación a los y las agentes del Ministerio Público, lograr que los hechos violatorios de derechos humanos no se repitan en los términos anotados en la presente resolución y contribuir a su prevención, adoptando todas las medidas administrativas necesarias de supervisión de sus actuaciones, para hacer efectivo el ejercicio de los derechos de las víctimas, para ello se debe brindar capacitación y adiestramiento a las personas servidoras públicas mencionadas, con especial atención a los derechos humanos de las víctimas para que se otorgue el acompañamiento necesario, se dé seguimiento a las sentencias y se instauren los recursos necesarios cuando procedan.

c) Medidas de rehabilitación.

53.5.- Las medidas de rehabilitación, pretenden reparar las afectaciones físicas, psíquicas o morales que puedan ser objeto de atención médica o psicológica. Para esta finalidad, se deberá brindar atención médica y psicológica adecuada a “A” y sus hijos e hija, en su carácter de víctimas indirectas.

54.- Atendiendo a los razonamientos y consideraciones antes detallados, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos estima que a la luz del sistema de protección no jurisdiccional, se desprenden evidencias suficientes para considerar violados los derechos fundamentales de “A”, específicamente el derecho de acceso a la justicia y a la reparación del daño a la víctima, por omitir tomar medidas correspondientes para garantizar la reparación integral del daño y en su caso la indemnización, por parte de personal adscrito a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género; por lo que en consecuencia, respetuosamente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42 y 44 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, así como los numerales 84, fracción III, inciso a), 91, 92 y 93, del Reglamento Interno de esta Comisión, resulta procedente emitir las siguientes:

VI. - RECOMENDACIONES :

A usted **maestro César Augusto Peniche Espejel, en su carácter de Fiscal General del Estado:**

PRIMERA.- Se inicie, integre y resuelva conforme a derecho, el procedimiento administrativo que corresponda, en contra de las personas servidoras públicas adscritas a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, involucradas en los hechos de la presente queja, tomando en consideración las evidencias y razonamientos esgrimidos en la presente resolución y, en su caso, se impongan las sanciones que correspondan.

SEGUNDA.- Se proceda a la reparación integral del daño a “A”, de manera oportuna, plena, integral y efectiva, como consecuencia de las violaciones a sus derechos humanos, en términos de la Ley General de Víctimas y de la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua, tomando en consideración lo que se detalla en el capítulo V de la presente resolución, remitiendo a este organismo pruebas de cumplimiento.

TERCERA.- En un plazo que no exceda de 30 días naturales contados a partir del día siguiente de la aceptación de la presente resolución, en los términos de lo establecido en la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua, inscriba a “A” en el Registro Estatal de Víctimas, para lo cual deberá enviar a esta Comisión las constancias con las que se acredite su cumplimiento.

CUARTA.- Se giren las instrucciones que correspondan, para que se adopten todas las medidas administrativas que sean necesarias de capacitación a las y los agentes del Ministerio Público, en los términos previstos en el párrafo 53.4.

La presente recomendación, de acuerdo con lo señalado por el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el carácter de pública y con tal índole se publica en la gaceta de este organismo, y se emite con el propósito fundamental tanto de hacer una declaración respecto a una conducta irregular cometida por personas servidoras públicas en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, como de obtener la investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualesquiera otras autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate.

Las recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos no pretenden, en modo alguno, desacreditar a las instituciones ni constituyen una afrenta o agravio a las mismas o a sus titulares, por el contrario, deben ser concebidas como instrumentos indispensables en las sociedades democráticas y en los Estados de derecho, para lograr su fortalecimiento a través de la legitimidad que con su cumplimiento adquieren autoridades y personas servidoras públicas ante la sociedad.

Dicha legitimidad se robustecerá de manera progresiva cada vez que se logre que aquellas y éstas, sometan su actuación a la norma jurídica y a los criterios de justicia que conlleven el respeto a los derechos humanos.

Una vez recibida la Recomendación, la autoridad o persona servidora pública de que se trate, informará dentro de los 15 días hábiles siguientes a su notificación, si se acepta.

De ser así el caso, entregará en otros 15 días adicionales, las pruebas correspondientes de que se ha cumplido, ello según lo establecido en el artículo 44 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. La falta de respuesta dará lugar a que se interprete que la misma no fue aceptada.

En caso de que se opte por no aceptar la presente Recomendación, le solicito en los términos del artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 44 de la multireferida Ley, que funde, motive y haga pública su negativa. No dudando de su buena disposición para que la presente sea aceptada y cumplida.

A T E N T A M E N T E

NÉSTOR MANUEL ARMENDÁRIZ LOYA

P R E S I D E N T E

*EMF

C.c.p.- Quejosa, para conocimiento.

C.c.p.- Lic. Jair Jesús Araiza Galarza, Secretario Técnico. Para conocimiento.